

JUAN CIUDADANO

◆ Se requiere castigo para los estados que no brinden resultados y cuentas claras.

Los maestros comisionados

JUAN CIUDADANO

Durante el reciente proceso de aprobación presupuestaria, los legisladores trabajaron entre la presión de gobernadores por más recursos y los reclamos sociales por austeridad en el gasto antes de sacarle más recursos a los contribuyentes.

Entre estas presiones cruzadas, los diputados encontraron una manera de salir por en medio: anunciar reglas de fiscalización más estrictas en paralelo a la asignación de más recursos para diferentes partidas presupuestales. Entregar el cheque, pero mostrando los dientes de las instancias fiscalizadoras parece ser la nueva fórmula.

Asumiendo –sin conceder– que el incremento presupuestal se justifica, el equilibrio buscado al dar más, exigiendo mejores cuentas, parece razonable. Salvo por el hecho de que este tipo de anuncios ya se hicieron en anteriores ciclos fiscales, las instancias gubernamentales que supuestamente darían más información ya incumplieron, y al final no pasó nada.

De hecho esta es la historia de cada año en el sector educativo.

Un par de notas de Sonia del Valle en *Reforma* la semana pasada ponen

al descubierto la maniobra de volver a patear hacia adelante la obligación de la SEP de exigirle al SNTE, o a las autoridades educativas locales, explicaciones específicas sobre cómo se está usando el gasto educativo, una parte del cual hasta hoy permanece como un misterio.

Hace unos días la Cámara de Diputados aprobó 14 mil millones de pesos adicionales para el sector educativo para el 2010, y en paralelo anunció que endurecería los criterios de transparencia tanto para la Secretaría de Educación Pública como a las universidades.

Entre estas “nuevas” obligaciones de transparencia está el viejo tema no resuelto de los maestros comisionados a actividades del SNTE. Hay que empezar por explicar lo más básico: cuántos son, quiénes son, qué hacen, por cuánto tiempo, en qué estados, dónde está su centro de trabajo.

Adicionalmente la SEP estará obligada a esclarecer, en equipo con los gobiernos estatales, el inventario de plazas federales y locales, para después vincular cada una de estas con los docentes que las ocupan. Se trata de cotejar sueldos de maestro, supervisor,

personal administrativo o director de escuela, con las tareas que de hecho se llevan a cabo.

Todo esto suena muy bien, pero valdría la pena empezar por hacer que se cumpla lo prometido para el ejercicio presupuestal 2009. Los estados tenían la obligación de entregar a los diputados exactamente la misma información que ahora la Cámara le pide a la SEP. Los estados no cumplieron (ninguno) y no pasó nada. Con este mensaje de impunidad es ingenuo pensar que las cosas en 2010 serán diferentes.

Más que hacer nuevas promesas, lo que tendrían que estar resolviendo los legisladores es: ¿cómo castigar a los estados por haber incumplido con su obligación de rendir cuentas?

Una situación similar se vive en torno al polémico programa Enciclomedia. Entre 2005 y el día de hoy los mexicanos hemos pagado, sólo en renta de equipos, alrededor de 20 mil millones de pesos. Esto sin que nadie nos haya dado hasta ahora la explicación de cuáles son los resultados medibles de esta inversión en el incremento de capacidades de los niños.

Ahora, para el ejercicio fiscal 2010

la Cámara de Diputados anunció que transferirá poco a poco la operación del programa a los estados. Y bajo este nuevo esquema de gestión –ahora sí se generarán indicadores para medir su impacto. Ya vamos tarde.

Pero además, y sobre todo en estos tiempos de crisis, antes de decidir si queremos seguirle metiendo dinero a Enciclomedia, tendríamos que tener claridad sobre los resultados obtenidos hasta ahora. Son éstas las cuentas que los diputados tendrían que estar exigiendo al Gobierno federal antes de asignarle más recursos al programa y entregárselo a los estados.

Lo diputados se han vuelto expertos en ofrecer más transparencia, incluso dándole fachada legal a la promesa.

Pero lo que requerimos del Poder Legislativo es una tarea mucho más contundente: asegurar que se honren los compromisos previos de rendición de cuentas. Llegando incluso a castigar deteniendo la entrega de recursos adicionales.

Sólo esto hará creíbles las nuevas promesas.

juanciudadano@juanciudadano.com

